les, haciendover a cada uno lo que debe cumplir, para lo cual se han transcrito los artículos pertinentes. De parte de la Gobernación se ha recibido el suficiente apoyo para las labores de esta Dirección en relación con la Ley citada.

«*Prefecturas. Alcaldías*— Constantemente se halla la Dirección de Higiene en comunicación con todas las autoridades del Departamento, exigiendo el cumplimiento de todas las disposiciones sanitarias, resolviendo consultas y llamando la atención hacia las nuevas resoluciones que se expidan. La mayor parte de las Oficinas se hallan dotadas de un ejemplar de *Compilación de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones vigentes sobre Higiene y Sanidad en Colombia*, a fin de que puedan tener más a la mano lo que rige en esta materia. Sería muy conveniente que se compilaran todas las nuevas disposiciones que se han expedido desde el año de 1921 para acá, a fin de facilitar más las consultas de ellas.»

LEYES SOBRE HIGIENE

En mis anteriores informes llamé la atención del Gobierno sobre las disposiciones más urgentes que se necesitaban para que nuestra legislación sanitaria pudiera aplicarse eficazmente. Afortunadamente el Congreso del año pasado dictó dos leyes de la mayor importancia, como son la 99 de 1922 y la 12 de 1923.

La primera contiene la mayor parte de las disposiciones que la VI Conferencia Sanitaria Internacional Panamericana de Montevideo aconsejó para aquellas naciones que, como Colombia, carecían de leyes relativas a la declaración de las enfermedades infecciosas, de disposiciones sobre estadística médica, sobre provisión y vigilancia de las aguas potables en las poblaciones y vacunación antivariolosa obligatoria.

Creo conveniente insertar en seguida los principales artículos de esta Ley:

«LEY 99 DE 1922

«(DICIEMBRE 7)

por la cual se adicionan las leyes vigentes sobre higiene pública.

«*El Congreso de Colombia*

«DECRETA:

«Artículo 1.º Para la aplicación de las medidas profilácticas, las enfermedades infectocontagiosas se dividen en dos grupos: 1.º, aquellos casos en que es obligatorio declararlos ante la autoridad respectiva, y 2.º, los casos en que esta declaración es potestativa.

«En el primer grupo quedan comprendidas las siguientes enfermedades: cólera asiático y el cólera nostras, fiebre amarilla, peste bubónica, tifo exantemático, fiebres tifoidea y paratifoidea, viruela, difteria, escarlatina, disenterias bacilar y amibiana, tuberculosis pulmonar y laringea, neumonía infecciosa, meningitis cerebroespinal y epidémica. A esta lista pueden agregarse aquellas otras enfermedades infectocontagiosas en que, en concepto de la Dirección Nacional de Higiene y previa consulta con la Academia de Medicina Nacional, sea necesaria la declaración obligatoria.

«Respecto a la declaración de la lepra, regirán las disposiciones actuales.

«La lista de las enfermedades del segundo grupo, en que la declaración es potestativa, será formada por la Dirección Nacional de Higiene, consultando previamente a la Academia Nacional de Medicina.

«Artículo 2.º La declaración de las enfermedades se hará a las autoridades sanitarias correspondientes, y donde no las hubiere, al Alcalde Municipal o al Corregidor.

«La declaración que se haga a la autoridad de policía tendrá únicamente por objeto que el Alcalde comunique el hecho al respectivo Director Departamental de Higiene y pueda cumplir lo que dispone el artículo 9.º de la Ley 66 de 1916, respecto a formación de estadística nosográfica.

«Artículo 3.º Corresponde hacer la declaración: 1.º, a todo médico que examine o recete al enfermo; si dos o más médicos lo han examinado en consulta, la declaración debe hacerla el médico de cabecera. Esa declaración debe efectuarse a más tardar veinticuatro horas después de hacer el diagnóstico seguro o probable de la enfermedad; 2.º, si no hubiere médico que asistiere al enfermo, hará la declaración el jefe de la casa, hotel, colegio, cuartel, prisión, fábrica, etc., en que hubiere un enfermo sospechoso de alguna de las enfermedades que deben declararse; 3.º, toda persona que de acuerdo con las disposiciones legales ejerza la medicina, o alguno de sus ramos, sin ser médico graduado, estará obligado también a hacer la declaración de la enfermedad.

«Artículo 4.º Los médicos titulados y demás personas en ejercicio legal de la medicina que, en cumplimiento de esta Ley, hicieren las declaraciones de las enfermedades de que trata el artículo 1.º de esta Ley, quedan legalmente desligados del secreto profesional en lo que se refiere a tales enfermedades, y no incurrirán en pena alguna por este motivo.

«Artículo 5.º Los médicos y demás personas que ejerzan legalmente la medicina están obligados a indicar al jefe de la familia, casa o establecimiento, los medios que, de acuerdo con las disposiciones sanitarias, deben emplearse para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas que hayan comprobado en un enfermo que esté a su cargo.

«Artículo 6.º El Gobierno reglamentará, previo concepto de la Dirección Nacional de Higiene, la manera como deben hacerse las declaraciones obligatoria y potestativa de las enfermedades a que se refiere la presente Ley.

«Artículo 7.º En las enfermedades infectocontagiosas denunciables, es obligatoria la desinfección de los locales, ropas, muebles y demás objetos infectados. La Dirección Nacional de Higiene reglamentará esta desinfección e indicará los procedimientos que deben emplearse.

«Parágrafo 1.º En caso de que por medida profiláctica sea necesario incinerar algún inmueble u objetos, se hará al dueño la indemnización correspondiente de acuerdo con las leyes vigentes.

«Parágrafo 2.º Tanto la desinfección como la indemnización en el caso del parágrafo anterior, serán de cargo del Estado.

«Artículo 8.º La autoridad podrá ordenar la desocupación de una casa que sea foco de alguna enfermedad contagiosa o que amenace la salubridad pública. Dicho inmueble no podrá habitarse sino cuando haya desaparecido de él todo peligro por haberse practicado la desinfección y demás medidas que las autoridades sanitarias ordenen.

«Artículo 9.º La vacunación antivariolosa es obligatoria para todos los habitantes de la República en el curso del primer año de edad; y la revacunación, a los once y a los veintinueve años. Los padres, tutores o patro-

nes son responsables de la infracción de esta medida cuando se trate de menores de edad.

«La Dirección Nacional de Higiene reglamentará la vacunación anti-variola y señalará las penas que deben aplicarse cuando se infrinja este artículo.

«Artículo 10. Los directores de los establecimientos de educación públicos y privados exigirán de los padres o acudientes de los alumnos el certificado de vacunación anti-variola expedido por un vacunador oficial o por un médico graduado, para recibirlos o matricularlos. Esto mismo harán los jefes o directores de cuarteles, asilos, hospicios, casas de salud, prisiones, etc., y los patrones o directores de establecimientos o de fábricas industriales. Si no se presentare el certificado de vacunación, el director respectivo dará inmediato aviso a la autoridad respectiva sanitaria y en su defecto a la autoridad política, para que se haga practicar la vacunación.

«Los directores que no cumplieren esta disposición serán castigados con multas de \$ 1 a \$ 5, en cada caso.

«Artículo 11. Los Municipios cuya población sea de 10,000 o más habitantes, están obligados a sostener permanentemente un vacunador oficial, cuyas funciones reglamentará el respectivo Director Departamental de Higiene.

«Esta misma obligación tendrán los Municipios de menor población cuando apareciere en alguno de ellos una epidemia de viruela.

«Artículo 12. Toda persona residente en Colombia y toda autoridad pública o administrativa, están obligados a suministrar a las autoridades sanitarias los datos que soliciten para formar las estadísticas demográficas y sanitarias de la República.

«Cuando los datos que se pidan a los médicos se refieran a enfermedades que no estén comprendidas entre las denunciadas, tales datos los suministrarán sin mencionar el nombre del enfermo ni su casa de habitación.

«La infracción de esta disposición será castigada por las autoridades sanitarias con multas de \$ 1 a \$ 5 cada vez.

«Artículo 13. No podrá llevarse a efecto la construcción de ningún edificio público o privado que, como hospitales, asilos, casas de salud, manicomios, dispensarios, plazas de mercado, mataderos, etc., se destinen al público o que puedan ser perjudiciales para la higiene pública, sin que el respectivo Director Departamental de Higiene o el Director Nacional de Higiene aprueben, en lo que se relaciona con la higiene, la elección del sitio en que se construya y los planos adoptados.

«Los Directores de Higiene de que se ha hablado pueden suspender las obras que se estén construyendo sin la aprobación del sitio y del plano. Asimismo podrán ordenar que se destruya la parte de las mismas obras que se hayan construido de una manera distinta de la señalada en el plano aprobado, salvo que las modificaciones hayan sido también aprobadas.

«Artículo 14. Los hospitales, asilos, hospicios, dispensarios y demás establecimientos de beneficencia o de asistencia pública, costeados con fondos del Tesoro Nacional, Departamental o Municipal, o que reciban subvenciones o auxilios de los mismos Tesoros, deben someter los reglamentos de su administración científica a la aprobación del Director Nacional de Higiene si los reciben del Tesoro Nacional, del Director Departamental de Higiene si los reciben del Tesoro Departamental, y del Médico Municipal si los reciben del Municipio.

«No podrá entregarse ninguno de los auxilios o subvenciones a dichos establecimientos, si no se comprueba que sus reglamentos o las modificaciones que sufran han sido aprobados de acuerdo con esta disposición.

«Artículo 15. Corresponde a la Dirección Nacional de Higiene la inspección y reglamentación sanitarias de la fabricación y expendio de los productos alimenticios, bebidas, etc., que deban darse al consumo público.

«También corresponde a la misma Dirección dictar las disposiciones necesarias para la protección y desinfección de las aguas que hayan de darse al consumo de las poblaciones.

«Artículo 16. Dentro del área de las poblaciones cuya temperatura pase de 18 grados centígrados y en una distancia no menor de 200 metros de las habitaciones, no se permitirán plantaciones como el plátano, maíz, cañas u otras capaces de retener pequeños depósitos de aguas apropiados para la reproducción de zancudos. Esta prohibición se extiende a las curtiembres, depósitos de pieles, destilatorios, jabonerías, porquerizas y demás establecimientos que puedan ser causa de insalubridad en todas las poblaciones de la República.

«Artículo 17. Los Concejos, además de las atribuciones enumeradas en el artículo 169 de la Ley 4.^a de 1913, podrán obligar a las personas naturales o jurídicas a que contribuyan proporcionalmente al costo que ocasione encauzar y cubrir hasta fuera de las poblaciones los cauces naturales o artificiales por los cuales se dé curso a aguas sucias procedentes de sus casas, fábricas, establecimientos, etc.

«Las sumas con que debe contribuir cada persona podrá hacerlas efectivas el Tesoro Municipal, como si se tratara de una acreencia del Municipio, pero en ningún caso podrá dársele aplicación distinta. El Tesorero se hará responsable directamente de esta infracción.

«Artículo 18. Cuando no se haya dado cumplimiento al artículo 7.^o de la Ley 46 de 1918, en la expedición de acuerdos municipales (1), la Gobernación del respectivo Departamento o los Intendentes o Comisarios, en su caso, conminarán con multas sucesivas hasta de \$ 5 a cada uno de los miembros remisos del Concejo que estuvieren en ejercicio para que cumplan aquella obligación.

«Artículo 19. Todo propietario, y en general cualquiera otra persona que tenga a su cuidado animales, están obligados a denunciar ante la autoridad sanitaria, si la hubiere, o ante la autoridad política, toda enfermedad infecciosa, como carbón, ranilla, renguera, muermo, fiebre aftosa, etc. La autoridad que reciba el aviso lo comunicará a la respectiva Dirección Departamental de Higiene. Las medidas profilácticas que éstas dicten serán obligatorias para los dueños de los animales enfermos y para los de los predios vecinos, cuando fuere el caso.

«Los veterinarios llamados a recetar animales están igualmente en la obligación de denunciar aquellas enfermedades.

«Artículo 20. Los Inspectores Locales de Sanidad ejercerán sus funciones bajo la exclusiva dependencia de las autoridades que en cada caso señalen las Direcciones Nacional o Departamental de Higiene.

«Artículo 21. Las autoridades administrativas y de policía darán inmediato cumplimiento a las disposiciones sobre higiene, mientras no sean modificadas ni derogadas por la autoridad sanitaria superior o declaradas inexecutable por el Tribunal competente. Las infracciones de esta disposición serán castigadas con multas de \$ 5 a \$ 50, que impondrá el respectivo Director Departamental de Higiene.

«Artículo 22. El Director Nacional de Higiene, los Directores Departamentales de Higiene, los Médicos de Sanidad de los puertos y los Inspec-

(1) Este artículo impone a los Municipios cuya población tenga más de 15,000 habitantes, la obligación de destinar anualmente el 2 por 100 de sus rentas a la construcción de habitaciones higiénicas para las clases proletarias.

tores de Sanidad, tienen la atribución de imponer como penas en los casos de infracción de las disposiciones sanitarias, y de acuerdo con éstas, multas sucesivas que no excedan de \$ 50, y arrestos hasta por quince días.

«Las multas podrán hacerse efectivas ya convirtiéndolas en arresto conforme a las reglas comunes, o cobrándolas ejecutivamente, para lo cual las autoridades a que se refiere esta Ley quedan investidas de jurisdicción coactiva.

«Artículo 23. Para atender a los gastos de higiene municipal, los Concejos podrán gravar el consumo de las mercancías extranjeras que no estén gravadas por la Nación con el impuesto de consumo. Pero el gravamen no podrá exceder de \$ 1-50 por cada carga o tardo de 75 kilogramos.

«Artículo 24. Ninguna inhumación podrá efectuarse antes de transcurridas por lo menos doce horas después de la defunción. Solamente con permiso del Médico oficial y previo certificado en que conste que se han hecho en el cadáver las demostraciones médicas necesarias para comprobar la muerte, podrá hacerse la inhumación antes de ese tiempo.

«Parágrafo. En los lugares donde no haya Médico oficial se llenarán estas funciones por un médico titulado, y a falta de éste, por las personas que designe la primera autoridad política del lugar.

«Artículo 25. El Gobierno determinará la manera como deben expedirse los certificados de defunción de que trata el artículo 9.º de la Ley 66 de 1916, en los lugares donde no hay médico.

«Artículo 26. Es de carácter oneroso, y por lo tanto de obligatoria aceptación con las limitaciones que establece la ley, el cargo de miembros de las Comisiones Sanitarias Municipales de que trata el artículo 8.º de la Ley 84 de 1914.

«Artículo 27. Los Municipios cuyas rentas alcancen a \$ 4,000 anuales, están en la obligación de incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender a los gastos de local, útiles de escritorio y sueldo del Secretario de las Comisiones Sanitarias Municipales permanentes. En los Municipios cuyas rentas anuales sean inferiores a \$ 4,000, estos gastos serán de cargo del respectivo Departamento.

«Los Municipios cuya población exceda de 8,000 habitantes, deben tener los aparatos necesarios para la desinfección de las habitaciones.

«Artículo 28. Los Directores Departamentales de Higiene practicarán visitas sanitarias en los Municipios en que a juicio de la Dirección Nacional de Higiene fueren necesarias. Esta Dirección, con aprobación del respectivo Ministerio, señalará viáticos para practicar las visitas de Inspección.

«Artículo 29. La exportación de las drogas a que se refiere la Ley 11 de 1920, sobre importación y venta de medicamentos que forman hábitos perniciosos, no podrá hacerse sino con licencia de Ministro respectivo, previo concepto favorable de la Dirección Nacional de Higiene. La contravención de esta disposición será castigada con multas de \$ 50 a \$ 100, más la prohibición de volver a importar y vender cualquiera de dichas drogas, bajo las sanciones que impone el artículo 7.º de la Ley citada.

«Artículo 30. Los Médicos de Sanidad de los puertos no están obligados a verificar visitas de sanidad en los buques después de las seis y media de la tarde, ni en los días feriados, sino en los casos urgentes de que tratan los artículos 3.º de la Ley 78 de 1916, 199 de la Ley 85 de 1915 y 50 de la Ley 78 de 1917. En estos casos cobrarán como honorarios \$ 10 por cada visita de inspección, los que cubrirá el administrador de la respectiva aduana, previa la presentación de la cuenta de cobro con sus comprobantes.

«El Administrador de la Aduana respectiva para hacer este pago cobrará como servicio extraordinario a la correspondiente empresa naviera el valor de tal servicio.

«Artículo 31. El Médico de Sanidad del puerto exigirá a todo pasajero que haya de desembarcar, el certificado de vacunación o revacunación antivariolosa. Si no trajere certificado, lo vacunará gratuitamente, sin lo cual no podrá desembarcar.»

Las campañas sanitarias que ha habido necesidad de emprender después de la expedición de esta Ley, han dado ocasión para que se palpén los buenos efectos de las disposiciones que invisten de amplias autorizaciones a los Médicos de Sanidad y a los Inspectores Sanitarios para hacer cumplir las disposiciones sobre higiene, las cuales no quedan ya a merced de la voluntad de los Alcaldes o Prefectos, casi siempre indiferentes u hostiles a esas medidas.

Hace falta que se expida una ley sobre inspección de farmacias y droguerías. Este importante comercio, que tanto y tan gravemente puede afectar la salud de los asociados, no está sujeto a reglamentación alguna, pues no pueden considerarse como tál las dispersas y defectuosas disposiciones que hay en los Códigos de Policía, y que varían de un Departamento a otro.

Alcoholismo—El Congreso, en desarrollo del Acto legislativo número 1.º de 1921, dictó la Ley 12 del presente año, que sienta las bases para una lucha contra el alcoholismo, con la cual se atiende al clamor unánime de la Nación para que se combata el alcoholismo que, por lamentables errores de nuestra legislación fiscal, avanza y se agrava día por día. Las principales disposiciones de esta Ley son las siguientes:

«Artículo 1.º Las Asambleas Departamentales dictarán disposiciones contra el alcoholismo, restringiendo la producción, venta y consumo de licores destilados y de bebidas fermentadas.

«Artículo 2.º La renta de licores, en guarda de la salubridad, seguridad y moralidad públicas, será administrada directamente por los Departamentos.

«Estas mismas entidades deben producir esos licores directamente o por medio de contratos con particulares, sin usar sustancias que sean nocivas a la salud, como el anetol, y sin que puedan vender licores de otros grados de los siguientes del areómetro Cartier:

«Aguardiente común y anisado, no menos de 18, ni más de 20 grados; ron, 17 grados; y

«Alcohol puro, de 30 a 40 grados.

«Artículo 3.º Pueden los Departamentos administrar la renta de licores directamente o por los sistemas de arrendamiento o de administración delegada, sujetándose a las prescripciones de esta Ley en todo lo relativo a licores destilados y fermentados.

«Artículo 4.º Las Asambleas Departamentales reglamentarán los precios de los licores monopolizados, de tal manera que una botella de aguardiente común de 720 gramos, valga como minimum un peso con ochenta centavos.

«Los demás licores monopolizados se venderán a un precio mayor que éste.

«Con el fin de evitar el fraude, el Gobierno fijará el precio de los alcoholes en todo el país, teniendo presente que los destinados a usos industriales, médicos y de beneficencia, deben venderse a un precio menor de la mitad del que se fije para los destinados a otros usos.

«Los Departamentos del Norte de Santander y Nariño quedan facultados para fijar el precio de los licores destilados en los Municipios limi-

«Artículo 31. El Médico de Sanidad del puerto exigirá a todo pasajero que haya de desembarcar, el certificado de vacunación o revacunación antivariolosa. Si no trajere certificado, lo vacunará gratuitamente, sin lo cual no podrá desembarcar.»

Las campañas sanitarias que ha habido necesidad de emprender después de la expedición de esta Ley, han dado ocasión para que se palpén los buenos efectos de las disposiciones que invisten de amplias autorizaciones a los Médicos de Sanidad y a los Inspectores Sanitarios para hacer cumplir las disposiciones sobre higiene, las cuales no quedan ya a merced de la voluntad de los Alcaldes o Prefectos, casi siempre indiferentes u hostiles a esas medidas.

Hace falta que se expida una ley sobre inspección de farmacias y droguerías. Este importante comercio, que tanto y tan gravemente puede afectar la salud de los asociados, no está sujeto a reglamentación alguna, pues no pueden considerarse como tál las dispersas y defectuosas disposiciones que hay en los Códigos de Policía, y que varían de un Departamento a otro.

Alcoholismo—El Congreso, en desarrollo del Acto legislativo número 1.º de 1921, dictó la Ley 12 del presente año, que sienta las bases para una lucha contra el alcoholismo, con la cual se atiende al clamor unánime de la Nación para que se combata el alcoholismo que, por lamentables errores de nuestra legislación fiscal, avanza y se agrava día por día. Las principales disposiciones de esta Ley son las siguientes:

«Artículo 1.º Las Asambleas Departamentales dictarán disposiciones contra el alcoholismo, restringiendo la producción, venta y consumo de licores destilados y de bebidas fermentadas.

«Artículo 2.º La renta de licores, en guarda de la salubridad, seguridad y moralidad públicas, será administrada directamente por los Departamentos.

«Estas mismas entidades deben producir esos licores directamente o por medio de contratos con particulares, sin usar sustancias que sean nocivas a la salud, como el anetol, y sin que puedan vender licores de otros grados de los siguientes del areómetro Cartier:

«Aguardiente común y anisado, no menos de 18, ni más de 20 grados; ron, 17 grados; y

«Alcohol puro, de 30 a 40 grados.

«Artículo 3.º Pueden los Departamentos administrar la renta de licores directamente o por los sistemas de arrendamiento o de administración delegada, sujetándose a las prescripciones de esta Ley en todo lo relativo a licores destilados y fermentados.

«Artículo 4.º Las Asambleas Departamentales reglamentarán los precios de los licores monopolizados, de tal manera que una botella de aguardiente común de 720 gramos, valga como minimum un peso con ochenta centavos.

«Los demás licores monopolizados se venderán a un precio mayor que éste.

«Con el fin de evitar el fraude, el Gobierno fijará el precio de los alcoholes en todo el país, teniendo presente que los destinados a usos industriales, médicos y de beneficencia, deben venderse a un precio menor de la mitad del que se fije para los destinados a otros usos.

«Los Departamentos del Norte de Santander y Nariño quedan facultados para fijar el precio de los licores destilados en los Municipios limi-

trofes con países vecinos, si lo estimaren conveniente a sus intereses fiscales.

«Artículo 5.º No se permitirá el expendio de licores destilados o de bebidas alcohólicas o fermentadas, de las seis de la tarde a las seis de la mañana, ni los domingos o días de fiesta nacional o religiosa. Esta prohibición no comprende las cervezas cuya producción alcohólica no exceda del 4 por 100, siempre que contengan la cantidad de extractos que correspondan a aquella proporción de alcohol.

«Artículo 6.º Es prohibido el expendio de licores embriagantes en teatros, circos, cinematógrafos, bailes públicos, galleras, casas de mujeres públicas, calles y plazas.

«Artículo 7.º Las Asambleas Departamentales gravarán con impuestos especiales de consumo a favor de los Departamentos y de los Municipios los licores destilados extranjeros y las bebidas fermentadas nacionales y las extranjeras.

«Se exceptúan las aguas gaseosas, sean o nó minerales, y las cervezas cuya proporción alcohólica no pase del 4 por 100.

«Artículo 8.º Queda prohibida la introducción de vinos que no provengan de la fermentación de la uva, o que contengan éteres o extractos artificiales o alcoholes distintos de los que resultan de la fermentación del azúcar de uva, y la introducción de coñac artificial y de cervezas cuya cantidad de alcohol exceda de 4 por 100 en volumen, y de ajenjos y licores similares. A este efecto el Departamento o particular introductor acompañará a la factura de aduana una certificación de un laboratorio autorizado, en que conste que el artículo que se introduce está dentro de las condiciones requeridas por este artículo.

«Se prohíbe el expendio de coñac artificial y de productos similares al vino legítimo de uva, salvo los provenientes de frutas frescas, siempre que tengan el visto bueno de la Junta de Higiene.

«Artículo 9.º Las fábricas que produzcan únicamente cervezas cuya proporción alcohólica no exceda del 3 por 100, que tengan una proporción también del 3 por 100 de extractos secos, siempre que no contengan sino alcohol etílico, y previo concepto favorable de la Academia de Medicina y de la Dirección General de Higiene, quedarán libres de todo gravamen si las dan al consumo a un precio no mayor de \$ 0-02 el vaso de 250 gramos.

«Artículo 10. El Poder Ejecutivo elevará los derechos de importación con que actualmente están gravados los licores destilados, los vinos y las bebidas fermentadas, no medicinales, hasta donde lo estime conveniente, para llenar los fines de esta Ley.

«Artículo 11. Sólo el Gobernador podrá conceder permiso para fiestas o regocijos públicos cuando a su juicio deban celebrarse con motivo de un fausto acontecimiento, y cuando tal permiso sea solicitado únicamente por el respectivo Concejo.

«Artículo 12. No se permitirá en adelante el establecimiento de nuevos expendios de bebidas alcohólicas al por menor mientras el número de los existentes exceda de uno por cada mil habitantes en el Municipio.

«Parágrafo. Para los efectos de esta Ley, se entiende por expendio al por menor la venta de bebidas o licores alcohólicos para el consumo inmediato en el lugar de expendio o la venta en cantidades menores de cinco litros.

«Artículo 13. La enseñanza antialcohólica es obligatoria en todos los establecimientos oficiales.

«Artículo 14. Las Asambleas Departamentales fijarán las penas a los infractores de esta Ley.

«Artículo 15. Para las Intendencias y Comisarías dictará el Gobierno

reglas sobre lucha antialcohólica, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley

«Artículo 16. Quedan encargados del cumplimiento de esta Ley todos los empleados nacionales, departamentales y municipales, dentro de la órbita de sus funciones.

«Las Asambleas Departamentales dictarán las disposiciones necesarias relativas a contrabando, sanciones penales, y demás que estimen convenientes, dentro de las disposiciones de esta Ley.

«Artículo 17. Como indemnización a los Departamentos por la restricción del producto de la renta de licores, se les cede desde el 1.º de julio el 50 por 100 del producto sobre la renta en cada uno de ellos, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5.º de la Ley 12 del presente año (1).

«El Gobierno queda autorizado para contratar con los Departamentos la administración de tal renta.

«Artículo 18. En las entidades donde se halle arrendada o dada en administración la renta de licores, no regirá esta Ley, sino una vez que terminen los contratos respectivos, en las disposiciones que pugnen con sus contratos.

«En las otras entidades regirá al iniciarse la próxima vigencia fiscal del respectivo Departamento.

«Las disposiciones sobre nuevos impuestos regirán de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Nacional.»

Tiene esta Ley varios defectos que es preciso corregir, pero tiene ella disposiciones importantes que hay que conservar. Entre éstas, y que pueden cumplirse y son de indiscutible importancia, están los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 12 y 13. El artículo 5.º, que prohíbe el expendio de licores destilados o de bebidas alcohólicas o fermentadas de las seis de la tarde a las seis de la mañana, y los domingos y días de fiesta nacional o religiosa, es, sin duda, muy benéfico, pero convendría modificarlo para ordenar que esos expendios estén cerrados en los días y horas mencionados, porque tal como está es fácil infringirlo para vender licores de contrabando.

La disposición del artículo 2.º, que ordena que las rentas de licores sean administradas directamente por los Gobiernos de los Departamentos y no por compañías rematadoras, interesadas en aumentar el consumo para mejorar su negocio, es muy sabia. Este sistema ha sido adoptado por el Departamento de Antioquia y por el de Caldas. Ya en mi informe del año pasado enumeré los magníficos resultados que esta medida ha dado en Antioquia, donde la administración de la renta por el Estado, que duplicó el precio de los licores, el consumo de bebidas alcohólicas disminuyó por habitante en un 52 por 100, sin que tal renta se perjudicara.

Iguales resultados ha dado en Caldas esta forma de administración de la renta; y en prueba de ello cito los siguientes conceptos del informe del Secretario de Hacienda a la Asamblea de dicho Departamento:

«La Gobernación del Departamento, en febrero de 1922, con plausible acierto, ordenó cerrar los estancos dos días antes del señalado para las elecciones del Presidente de la República. Esta prudente medida, que fue aplaudida unánimemente, dio excelentes resultados en cuanto al orden público, y en el orden económico puede asegurarse que poco fue el perjuicio para el Tesoro Departamental.

«Fue costumbre de los rematadores de la renta fomentar las fiestas o regocijos públicos con auxilios pecuniarios, medida que iba en beneficio

(1) Esta cita está errada.

de sus propios intereses, pero en perjuicio del público por el notable aumento en el consumo del alcohol que traían dichas fiestas. La Gerencia, siempre preocupada en combatir hasta donde sea posible el vicio del alcohol de una manera prudente, suprimió tales auxilios, sin perjuicio notorio para los intereses de la renta; esto y otra serie de medidas, como la supresión de estanquillos por mayor, la limitación de los créditos por damajuanas, la restricción de las ventas a crédito y la disminución ordenada del número de estanquillos y reventas en los caminos, lo ha hecho la Gerencia creyendo interpretar así la intención del legislador de restringir hasta donde sea posible el consumo del alcohol, objetivo que se ha conseguido en parte, porque el consumo en el Departamento no alcanza a un litro por cabeza y por año.»

El defecto grave de esta Ley, y que es preciso corregir, está en que el artículo 18 dispuso que en los Departamentos donde estuviera rematada la renta de licores, la Ley no rigiera sino cuando terminen los contratos respectivos, muchos de los cuales duran todavía varios años. Esto coloca en situación muy desventajosa a los Departamentos que ya han organizado su renta como lo ordena la Ley y señalado a los licores los altos precios que ella fija, porque tienen que sufrir la competencia de los rematadores de los demás Departamentos, pues la Ley los deja en libertad para señalar precios mucho más bajos. De aquí resulta una gran corriente de licores baratos hacia los Departamentos donde los precios son más altos, lo cual no solamente anula la renta de estas secciones, sino que estimula el consumo del alcohol, que llega al favor de un contrabando que es imposible evitar.

En algunos de los Departamentos en que no se administra la renta de licores oficialmente, se han dictado disposiciones restrictivas de acuerdo con los artículos 5.º y 7.º, lo que demuestra que éstos no tienen porqué derogarse, con el pretexto de que perjudican a la renta. En Santander y en Boyacá se han establecido impuestos especiales sobre la chicha y el guarapo. En Boyacá este impuesto se creó hace apenas cuatro meses, y ya se palpan sus buenos resultados, pues en nueve Municipios se han cerrado las fábricas de chicha.

Las medidas contra el alcoholismo entre nosotros deben comprender principalmente una campaña contra la *chicha*, bebida obtenida del maíz con pésimos procedimientos, y de que tanto se abusa. Las acertadas medidas que ha dictado últimamente el Concejo de Bogotá demuestran la eficacia de las principales disposiciones de la Ley 12 del presente año, porque con ellas se ha podido reprimir en esta capital el abuso de aquella bebida.

Pero el problema del alcoholismo producido por la chicha está íntimamente ligado con el defectuoso régimen alimenticio de nuestros trabajadores. El escaso salario que reciben no les permite una alimentación que esté en relación con el trabajo útil que se les impone; faltando diariamente a los trabajadores los alimentos que produzcan toda la energía que gastan en nueve horas de trabajo, buscan en el alcohol de la chicha el suplemento de energía que falta en una alimentación que no les da los medios de producir la fuerza que exige su trabajo.

Lo que se dice de esta bebida se aplica también al abuso del aguardiente en los lugares en que aquélla no se consume. Uno y otra conducen al alcoholismo por una misma causa. En todo tiempo y en toda zona el hombre siente necesidad instintiva de usar estimulantes del sistema nervioso, y de allí el empleo de las bebidas fermentadas y de otras más o menos excitantes, como el té y el café, que erróneamente se han tenido por alimentos. Cuando la alimentación es escasa o deficiente en ciertos principios, en relación con el esfuerzo que hay que emplear para la ejecución de un trabajo y reparar la pérdida de los tejidos, hay necesidad de hacer uso

de esos estimulantes, cuya pasajera excitación engaña al organismo. Acosúmbrase así el trabajador a buscar en los productos alcohólicos la energía que le falta, y de aquí pasa fácilmente al abuso, cada día más creciente, de una sustancia que le conduce a la ruina completa. Llega entonces al alcoholismo no por placer sino por una necesidad de su organismo, que puede satisfacer mejor por otros medios; en tanto que otras clases sociales, colocadas en mejores condiciones higiénicas y con una educación superior, llegan a él por una vulgar satisfacción, tanto más censurable cuanto convertido en costumbre y propagado por ejemplo, el vicio individualmente se transforma en la más peligrosa de las enfermedades sociales.

La lucha contra el alcoholismo encierra pues un problema social, cual es mejorar las condiciones de nuestra clase obrera, dándoles un salario suficiente para alimentarse, vestirse y vivir de acuerdo con las leyes de la higiene.

La Ley 12 de que se trata tiene, es verdad, grandes defectos, que pueden corregirse si el legislador afronta resueltamente el problema de la administración uniforme de la renta de licores; pero si retrocede rehuendo esta dificultad y aplazando o derogando esa Ley, caería en el gravísimo error de sacrificar la primera de las medidas que habrán de salvar el porvenir de la Nación.

La *Liga Nacional contra el Alcoholismo*, creada por medio de la Resolución número 146 de la Dirección Nacional de Higiene, elaboró los Estatutos de esa entidad y de las *Ligas Departamentales*, que se instalaron ya en todos los Departamentos. Tanto la Liga Nacional como las Departamentales esperan que se ponga en vigencia la Ley 12 para desarrollar su actividad, a fin de organizar la campaña antialcohólica de acuerdo con las disposiciones de aquella Ley. Todos los ciudadanos escogidos para formar esas ligas antialcohólicas han manifestado la mejor voluntad en prestar su colaboración a la Dirección Nacional y a las Departamentales de Higiene en esta patriótica empresa.

Teniendo en cuenta que tanto en Bogotá como en otras ciudades de la República se había extendido la industria de preparar vinos artificiales, que se daban al consumo sin escrúpulo alguno a pesar de su malísima composición, la Dirección Nacional de Higiene expidió la Resolución número 210, por la cual se señalan las condiciones que deben tener los vinos para que puedan darse al consumo. Así señaló una pauta o norma a la cual quedan sujetos tanto los vinos que se preparen en el país como los que vengan del Exterior. Se ocupa ahora esta Dirección en hacer examinar las cervezas que se consumen entre nosotros, a fin de tomar respecto de ellas una disposición de la misma naturaleza. De esta manera se protege a la sociedad librándola de bebidas en alto grado perjudiciales para la salud. Estas disposiciones se han dictado de acuerdo con las facultades que a la Dirección Nacional da el artículo 15 de la Ley 99 de 1922.

Tuberculosis—En 1916 se dictó la Ley 66, por la cual se organiza la lucha contra la tuberculosis en toda la República, la cual se modificó por medio de la Ley 112 de 1919. Estos dos actos legislativos se obtuvieron después de insistentes solicitudes que la Junta Central de Higiene y esta Dirección hicieron en vista de los alarmantes progresos que la tuberculosis hace en nuestro país. La buena voluntad de los Congresos de 1916 y 1919 no ha dado resultado alguno, porque desde años anteriores tanto el Ministerio del Tesoro como los Congresos no han querido incluir en los Presupuestos Nacionales las partidas que las mencionadas Leyes señalaron para atender a

la necesaria campaña contra una enfermedad que es ya un peligro mayor que el de la lepra y el de la sífilis. Puede decirse que la lepra y la sífilis dejan impreso el diagnóstico en el enfermo y alertan así a la sociedad. Mas no sucede lo mismo con la tuberculosis, porque su apariencia engañosa permite al enfermo extender el contagio antes de que el público advierta el peligro. Sin duda por eso se ha propagado de tal manera que, con razón, se ha dicho que hace más víctimas que todas las enfermedades contagiosas, y que ataca en el curso de una generación a la cuarta parte de los individuos que la componen y mata más de la sexta parte. A pesar de todo, es la tuberculosis la enfermedad en que la profilaxis puede ser más eficaz, porque son bien conocidos el germen que la produce, las condiciones en que éste vive y se desarrolla y la manera como penetra al organismo.

La lucha contra la tuberculosis comprende no solamente la profilaxis directa del contagio, sino medidas de profilaxis general o social, como son la campaña contra las bebidas alcohólicas, la protección de las clases obreras que viven en malas condiciones de higiene, la instrucción del pueblo desde la escuela y por la prensa, respecto a la profilaxis de la enfermedad, la asistencia de los enfermos en hospitales especiales, la protección del niño, etc. Es, en suma, una función del Gobierno, y los poderes públicos nacionales, departamentales y municipales deben emprenderla y sostenerla.

La base de esa lucha, y por donde debe principiarse la campaña, es el Dispensario, que puede establecerse sin grandes gastos. Bien organizado prestará inapreciables servicios no solamente a los enfermos que a él acuden sino a toda la sociedad. Al Dispensario irán aquellos individuos en quienes principia la enfermedad, y allí se les aplicarán tratamientos que siempre los aliviarán y que en ciertos casos pueden curarlos; se les instruirá en las precauciones que deben tener para que no comuniquen su enfermedad a las personas con quienes vivan; se instruirá a éstas sobre las medidas preservativas que deben tomar. Se llega así a organizar la profilaxis antituberculosa en la familia, con lo cual se salvarán del contagio muchas personas, principalmente niños, que son siempre las primeras víctimas. De esta manera el Dispensario no es solamente un gran recurso para el enfermo sino también un precioso elemento de defensa social.

Fueron estas consideraciones las que movieron a los legisladores de 1916 cuando se destinó una suma anual para fomentar el establecimiento de Dispensarios antituberculosos en los centros de población que lo requieran. Varios Departamentos dieron principio a la fundación de estos establecimientos, pero desgraciadamente faltó ese auxilio porque no se ha incluido en los presupuestos, y aquellos Dispensarios no pudieron fundarse a pesar de la promesa de la ley, que está vigente.

Enfermedades venéreas—Según el artículo 8.º de la Ley 66 de 1916, la autoridad sanitaria central debe reglamentar el servicio de profilaxis de estas enfermedades y dictar las medidas de policía necesarias para llevarlas a efecto. La Junta Central de Higiene y luego la Dirección Nacional, que reemplazó a esta Junta, se han ocupado en reglamentar este servicio, entendiéndose para esto con los Gobiernos y las Direcciones Departamentales de Higiene.

Siendo los Dispensarios la base indispensable para la organización de la profilaxis contra la sífilis y demás enfermedades venéreas, la Dirección Nacional ha hecho ante las Asambleas Departamentales gestiones repetidas para que se organicen Dispensarios en todos los Departamentos. En casi todos se han fundado estos establecimientos, pero en muy pocos se ha logrado que al mismo tiempo que se examinan los enfermos y se les medicina, se hospitalicen los que necesitan mantenerse aislados por cierto tiempo.

Se necesita además que haya en los Dispensarios un personal competente y un servicio de policía especial. En muy pocos Departamentos se ha podido establecer este servicio en esas condiciones, porque ha faltado el apoyo del Gobierno Nacional. En asuntos de tanta importancia se ha procedido con el mismo estrecho criterio con que se suprimió todo apoyo pecuniario para la campaña contra la tuberculosis.

Día por día se palpan los estragos que la sífilis causa en nuestra sociedad. De esta alarmante situación puede tenerse idea si se considera que son principalmente los jóvenes las víctimas de esta terrible infección; y es aterrador ver que, según las estadísticas de los Dispensarios de Bogotá, la mayoría de esos jóvenes infectados es de niños de quince a diez y siete años. El número de enfermos que acude a los Dispensarios de los Departamentos crece mes por mes, sin que, por falta de recursos, se les atienda debidamente ni se puedan dictar las medidas necesarias para evitar que esos enfermos continúen diseminando la terrible infección.

Los Gobiernos tienen el deber de impedir, o a lo menos de disminuir, la difusión de las enfermedades venéreas, asegurando el tratamiento de los enfermos e impidiendo el contagio de las personas sanas.

En vano ha venido clamando esta Dirección por que el Gobierno y la sociedad se resuelvan a emprender una lucha formal contra estas enfermedades. Comprendo que en esta ocasión tampoco se oirán los conceptos de esta Dirección; pero aunque así sea, no puedo dejar de poner a la vista de la Nación las dos terribles infecciones, tuberculosis y sífilis, que la minan y destruyen, a pesar de que la ciencia ofrece los medios de dominarlas.

LABORATORIO NACIONAL DE HIGIENE

Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el señor Director de las obras nacionales han continuado prestando atención a este edificio, que ha adelantado mucho en los últimos meses; y ya estuviera terminado si no se acabara la partida que para esta obra se señaló en el Presupuesto. Sin esta circunstancia se había podido inaugurar el 14 de julio, día en que se inauguró el monumento que en esta ciudad se erigió al sabio Pasteur, y con esto se habría contribuido dignamente a la celebración de esta fiesta.

El Congreso extraordinario abrió un crédito con la cantidad necesaria para concluir la obra, y es seguro que en el mes de octubre pueda ya instalarse, porque están en esta ciudad los aparatos, muebles y demás elementos necesarios para instalarlo.

Hay necesidad de modificar el personal señalado por la Ley 99 del año pasado, que será deficiente. En efecto, falta en ese personal un químico, que tenga buena remuneración, y otro ayudante, porque en este Laboratorio habrá una muy importante sección de química analítica para el análisis de las aguas, cervezas, vinos, leche y todas las demás sustancias alimenticias cuya composición debe vigilar constantemente la higiene. Allí deben también analizarse las especialidades farmacéuticas y las drogas.

PRESUPUESTOS DE HIGIENE

Día por día son más palpables las necesidades que en punto de higiene tiene la Nación; y sin embargo, los presupuestos que adoptan los Congresos son cada año más reducidos. Parece que hubiera empeño en detener el progreso de la Nación, pues bien sabido es que la base de la prosperidad de un pueblo es la higiene; y así se explica que las demás naciones, sin excepción, procuren destinar a este importante servicio una suma cada año más considerable. Nuestros Congresos han procedido al contrario. En 1921 la partida para gastos de higiene sumaba la cantidad de \$ 433,460; en

1922 esta partida bajó a \$ 188,720; en 1923 se redujo a \$ 109,000, y tengo conocimiento de que en el proyecto de Presupuesto que se presentará al Congreso de este año, ya no figuran sino \$ 80,000. Mientras que todos los demás países destinan para gastos de sanidad una suma nunca menor del 15 por 100 de las rentas comunes, en Colombia no alcanza al medio por ciento de las rentas la partida que se vota para ese gasto.

La cortadía de estas sumas causa una extrañeza tanto mayor cuanto con ellas se pretende atender a los gastos de sanidad de nuestros puertos y a los que demanden las epidemias que se presenten. Parece que el legislador ha olvidado que las prescripciones de la higiene no valen por el solo hecho de publicarse, sino que es necesario cumplirlas; y que entre la disposición escrita y su ejecución se interpone siempre el presupuesto.

Si se quiere dar cumplimiento a las disposiciones que se han dictado sobre higiene en Colombia, es preciso destinar para ello siquiera el 2 por 100 de las rentas. Es un deber imperioso de la Nación proteger la vida humana, que es su mayor y más precioso capital, en lo cual no hay sacrificio, porque todo gasto de educación y de preservación higiénicas, devuelve centuplicado el dinero que ha costado. El saneamiento de los puertos, que nuestro decoro exige y nuestros compromisos internacionales imponen, es una obra inaplazable que exige recursos especiales que no pueden tomarse de las rentas comunes y que sin vacilación debemos emprender apelando al crédito de la Nación. Es preciso establecer sin demora una campaña activa contra el estegomia, que es abundante en Barranquilla, Puerto Colombia, Cartagena, Santa Marta y Cúcuta, a fin de prevenir la aparición de la fiebre amarilla, que causaría enormes perjuicios a la Nación.

Conociendo el interés que ha tomado usted por todos los asuntos del servicio de higiene, a los cuales ha prestado siempre la mayor atención, no dudo afirmar que solicitará del actual Congreso que se modifique el Presupuesto para la próxima vigencia, aumentando cuanto fuere posible las sumas que se necesitan para los gastos más urgentes, e incluyendo las partidas que la ley ha destinado para la lucha contra la tuberculosis y las enfermedades venéreas; y que pedirá también que expidan los créditos adicionales que con tanta urgencia se necesitan en este año, por estar ya al agotarse las pequeñas sumas que figuran en el Presupuesto para gastos tan urgentes como los que demandan las epidemias y la sanidad de los puertos, a todo lo cual hay que atender preferentemente y sin dilación.

Termino este informe cumpliendo con el deber de presentar a usted mis agradecimientos por la manera como ha atendido a todos los asuntos de la Dirección Nacional de Higiene. Al apoyo oportuno que ella ha encontrado en usted y en el señor Secretario del Ministerio, doctor Forero Vargas, se debe el que hayan podido cumplirse oportunamente aquellas medidas que, como las relacionadas con las epidemias, exigen una pronta ejecución.

Soy de usted muy atento servidor,

PABLO GARCÍA MEDINA,
Director Nacional de Higiene

Bogotá, julio 14 de 1923.